

LOS GRANDES PROBLEMAS NACIONALES

ALONSO AGUILAR M. VICTOR M. BERNAL
ARTURO GUILLEN GREGORIO VIDAL

**La
inflación
en
México**

ALONSO AGUILAR MONTEVERDE
VICTOR M. BERNAL SAHAGUN
ARTURO GUILLEN · GREGORIO VIDAL

LA INFLACION EN MEXICO



EDITORIAL
NUESTRO TIEMPO, S. A.

Colección: TEMAS DE ACTUALIDAD

**C Editorial Nuestro Tiempo, S. A.
Avenida Universidad 771-103 y 104
Delegación Benito Juárez
México, D. F. Código Postal 03100**

ISBN-968-427-113-1

Portada: Ignacio Aguirre

Primera edición, 1984

Segunda edición, 1985

Tercera edición, 1988

Derechos reservados conforme a la ley

**Impreso y hecho en México
*Printed and made in Mexico***

INDICE

I. Los hechos. Gregorio Vidal	7
II. Las explicaciones de la inflación. Arturo Guillén	73
III. La inversión extranjera y la inflación. Víctor M. Bernal Sahagún	119
IV. ¿Qué hacer frente a la inflación? Alonso Aguilar Monteverde	151
Bibliografía.	207

IV

¿QUE HACER FRENTE A LA INFLACION?

ALONSO AGUILAR M.

— *De acuerdo en que la inflación es grave, pero
¿cómo combatirla?*

Si no es fácil lograr un acuerdo en torno a las causas que determinan la inflación, menos lo es conseguirlo para desplegar una acción conjunta y eficaz contra ella. Las diversas maneras en que se pretende hacerle frente se relacionan y aun derivan del tipo de explicación que se da acerca de su naturaleza y alcance. Quienes la ven por ejemplo como un fenómeno monetario, proponen para combatirla medidas de carácter también monetario y en general fiscal y financiero. Quienes la atribuyen a los intermediarios o a presiones especulativas, sugieren a su vez medidas que contrarresten tales acciones. Y así, sucesivamente.

De lo que resulta que el cómo combatir la inflación, lejos de ser un asunto sencillo que sólo suponga comprender sus principales manifestaciones económicas y elegir los medios más adecuados para hacerle frente, en realidad es un complejo problema, fundamentalmente político, y en el que

se expresan diferentes perspectivas y métodos de análisis, intereses distintos y aun encontrados y posiciones de clase a menudo irreconciliables. A ello obedece que al margen de tecnicismos y de la mayor o menor sofisticación de ciertos planteos, cuando se proponen medidas antinflacionarias capaces de incidir sobre las causas y los verdaderos responsables del alza de los precios, claramente se advierte que mientras unos culpan a los empresarios y en particular a los comerciantes, otros imputan la mayor responsabilidad al gobierno, las empresas estatales y los altos funcionarios; otros más a los consorcios transnacionales y algunos inclusive a los trabajadores, que al reclamar mayores salarios supuestamente contribuyen a acentuar la inflación. Y no faltan quienes piensan que así como todos somos víctimas, todos somos también responsables de la inflación, lo que sin duda vuelve aún más difícil saber qué hacer para combatirla con éxito.

— *¿Cuáles son hoy las posiciones antinflacionarias más socorridas y qué intereses representan?*

— En un país como México, en el que en 1982 el alza de los precios fue del 100%, y en 1983 de 81%, o sea la más alta en lo que va del siglo —salvo los convulsos días de la Revolución de 1910, en que ante la ausencia de una moneda mínimamente estable se generalizó el uso de los llamados “bilimbiques”, que más que papel moneda eran realmente moneda de papel—, mucha gente piensa que el problema principal a que nos enfrentamos es la inflación. Lo que es comprensible. Y aun quienes no tienen mayor familiaridad con las cuestiones económicas, proponen las más variadas medidas para contrarrestar el alza de los precios. Podría hacerse todo un catálogo en que se recogieran las más diversas propuestas para superar la inflación. Pero si se examinan las posiciones de que se habla todos los días, las que más circu-

lan y mayor influencia ejercen en la opinión pública, fácilmente se llega a la conclusión de que se trata de posiciones conservadoras, aunque algunas suelen ser también liberales, y que procedan de la empresa privada o del Estado responden a los intereses de la clase dominante, esto es de la burguesía, lo que desde luego no significa que sean idénticas. Aunque entre ellas se advierten diferencias que para ciertos análisis no debieran menospreciarse, en conjunto se trata de posiciones burguesas que, por ser hasta ahora las dominantes en la prensa, en círculos académicos, en la empresa privada y en esferas gubernamentales, en realidad tienen gran peso en las capas medias, la pequeña burguesía e incluso entre los propios trabajadores, sin excluir a la clase obrera.

— *¿Por qué se considera que, independientemente de sus variantes, tales posiciones son burguesas?*

— Porque proceden de diferentes fracciones de la burguesía y de los ideólogos a su servicio; porque tienden casi siempre a eximir de responsabilidad y aún tratan apologéticamente a esa clase social; porque sugieren que la condición para enfrentarse con éxito a la crisis y concretamente a la inflación es beneficiar de un modo u otro al capital y los capitalistas; porque ignoran o dejan de lado las fallas y deformaciones estructurales más serias del capitalismo o cuando más sólo reparan en algunas contradicciones secundarias, y porque, en vez de reconocer la legitimidad de las demandas salariales y por mejores condiciones de vida, y el que tales reclamos son provocados por la inflación, en sus versiones más reaccionarias los convierten demagógicamente en causas de ésta, y a los trabajadores que los promueven en responsables de la inestabilidad. Todo lo cual deja claro que tales posiciones, en realidad bien pobres, son típicamente las de los ricos.

— *¿Qué propone hacer la burguesía?*

La clase dominante no es homogénea. Está compuesta de diferentes segmentos entre los que, sobre todo bajo una crisis tan profunda como la actual se advierten desacuerdos y aun contradicciones significativas. Según algunos, las dos principales variantes en lo que se refiere a la inflación y cómo combatirla son hoy el llamado monetarismo, de un lado, y del otro las posiciones de corte más o menos keynesiano, que por cierto otros asocian, respectivamente, a la empresa privada y el Estado, como si estos fuesen los principales protagonistas y los extremos de la contradicción principal. Lo cierto es que aun predominando probablemente esas posiciones en una y otra de tales esferas, ambas se advierten también en cada una de ellas, lo que revela que su ubicación es más compleja.

— *¿Cuáles son las posiciones propiamente empresariales, y en un sentido más amplio las que defiende la llamada “iniciativa privada”?*

Reiterando que tales posiciones no son exclusivas del “sector privado”, podrían mencionarse las siguientes:

— Una primera, burdamente monetarista, que como ya vimos, supone a la inflación un fenómeno monetario y cree que todo el problema consiste en que el dinero en circulación crece más que la producción de bienes y servicios, sugiere que el banco central tiene en sus manos la posibilidad de corregir el desequilibrio. Que dicho banco — dicen — en su carácter de regulador de la moneda y el crédito, cuide que no haya demasiado dinero. ¡Esta es la clave! Y para ello lo que tiene que hacer es no emitir nuevos medios de pago por encima del ritmo a que crezca la producción ni dejar que los bancos, otras empresas o el Estado ejerzan presiones expansionistas.

— Una segunda corriente, en realidad muy cercana a la anterior pero que fundamentalmente culpa al Estado de que el dinero disponible crezca más que la producción, considera que lo que causa ese desajuste y por tanto la inflación es el gasto incontrolado del gobierno “. . . el inicio del proceso inflacionario —sostienen tales personas— está precedido por una aceleración de la tasa de aumento del circulante monetario; a éste, a su vez, precede un aumento desproporcionado en el gasto público respecto a la posibilidad de mayores ingresos sanos. . .”¹

Claramente se observa que para los monetaristas, al menos en el caso de México, la expansión desmedida del circulante —supuesta causa fundamental de la inflación— obedece al incontenible gasto del Estado. Por lo que no es de extrañar que todos coincidan en que el ritmo de crecimiento de éste debe reducirse como condición esencial para sanear las finanzas públicas y hacer manejable el déficit presupuestal. El propio gobierno, ahora más abiertamente que bajo la presidencia de José López Portillo, reconoce que el déficit del Estado es sin duda una de las causas de la inflación que es preciso atacar.

¹ Tal posición desde luego, no se circunscribe a los empresarios privados: la comparten también profesionistas y funcionarios del gobierno. En un reciente estudio sobre el tema, dos personas vinculadas al Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, expresan: “Un proceso inflacionario que se prolonga más de un año siempre es provocado por una política monetaria expansiva, esto es, un crecimiento del dinero en circulación superior al aumento del volumen de producción”. En otro pasaje, tras señalarse que el desmedido crecimiento de la demanda respecto a la oferta ha sido en México la principal causa de la inflación, al inquirir acerca de por qué aumentó tanto la demanda se hace notar que: “Dada la relación directa entre el incremento del circulante (monedas, billetes y cuentas de cheques) y la demanda, el mayor crecimiento del primero es el factor más importante que lo explica”. Lo que claramente muestra que, según tal versión, entonces y ahora una política monetaria restrictiva bastaría para acabar con la inflación. Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. A. C. *Inflación Estudio Económico, Financiero y Contable*. México, 1982, pp. 26-27.

— Una tercera variante de las opiniones de que hablamos, que a menudo suele asociarse al Fondo Monetario Internacional y los llamados “Chicago Boys” es aquella que, aceptando lo anterior pone el acento en ciertas medidas ortodoxas de carácter contraccionista. Según ella, para combatir la inflación es necesario —pero no suficiente— evitar el rápido crecimiento del dinero en circulación y reducir el déficit presupuestal sobre todo a través de menores gastos gubernamentales, especialmente de carácter social y que se destinan a amplias capas de la población; contener el alza de los salarios y asegurarse de que decrezcan en términos reales, bajar de ser posible los impuestos directos, sobre todo los que graven a los capitalistas, y estimular a éstos y en particular al capital monopolista —incluyendo el extranjero—, a fin de que aumente la producción y pueda así restablecerse el equilibrio entre la oferta y la demanda.

Las versiones más reaccionarias de la estrategia antinflacionaria no son pues meramente contraccionistas. Si bien tienen tal carácter y aconsejan reducir con firmeza los salarios reales, ciertos gastos del Estado, en particular en momentos en que la actividad económica declina o entra en crisis, se empeñan a la vez en favorecer a los empresarios privados y especialmente a los más poderosos. Les otorgan toda clase de facilidades y tratan de que la tasa de ganancia se eleve, a fin de que la actividad económica pueda reanimarse. Inclusive es común, como se aprecia fácilmente en la estrategia del gobierno norteamericano del presidente Reagan, que al mismo tiempo que se restringen ciertos gastos de aquellos que más interesan a los trabajadores, se multipliquen erogaciones improductivas, se dilapiden recursos y aún se fomente el armamentismo, destinándose sumas estratosféricas de dinero a enormes presupuestos militares, hecho que por sí solo demuestra que la política supuestamente antinflacionaria de tales gobiernos es en el fondo más bien inflacionaria, pues es obvio que el enorme gasto improducti-

vo y aun destructivo que el Capitalismo Monopolista de Estado pone en marcha debido a su extrema irracionalidad, debilita y deforma la estructura productiva, sustrae recursos que en otras condiciones podrían utilizarse racionalmente y favorece a los monopolios, cuyos precios y ganancias tienden a impulsar la inflación.

— Aunque en la posición anterior se incluyen de un modo u otro las que siguen, una muy socorrida concretamente entre los empresarios es la que, atribuyendo la inflación fundamentalmente al alza de los salarios, pretende que la forma de detener o al menos suavizar la elevación de los precios es conteniendo a aquéllos. Los más reaccionarios querrían que los salarios incluso se congelaran; que las huelgas, pese a ser un recurso legal a disposición de los trabajadores se prohibieran o declararan inexistentes; que al menos se asegurara que si los salarios aumentan, su incremento fuera desde luego muy inferior al de los precios, como condición para garantizar al empresario una utilidad “razonable”. En estos momentos, por ejemplo, los empresarios y otros elementos del “sector privado” se muestran complacidos de que, habiendo subido oficialmente los precios 81% en 1983, al iniciarse 1984 se autorice elevar el salario mínimo sólo 30%, o sea muy por debajo del ritmo a que aumentaron aquéllos, y también del que se espera que lo hagan en 84, lo que equivale a reducir el poder de compra real de los trabajadores. Y si como es lo más probable, la productividad del trabajo aumenta porque se reduce el nivel de empleo o porque las llamadas medidas de “racionalización” hacen posible una mayor explotación, la disminución relativa de los salarios reales será todavía mayor.

— Otra posición que vale la pena considerar porque es de las más reiteradas por la empresa privada es la que postula que, lejos de que el control de precios sea una medida antinflacionaria eficaz, es el aumento de los mismos lo que

hace posible elevar la producción y la oferta, y por tanto restablecer la estabilidad.

“Los precios controlados — alega por ejemplo la CONCANACO —, lejos de favorecer al desarrollo lo obstaculizan al generar mercado negro, déficits por los subsidios y frenar el progreso de los trabajadores. . . Los controles de precios rompen el proceso económico. . .”²

El alegato más común de los empresarios suele ser éste: bajo la inflación aumentan inevitablemente los costos. El propio gobierno contribuye a que ello sea así y autoriza elevaciones de precios de artículos que entran como insumos en otros procesos productivos. Pero pese a proceder de tal modo, con frecuencia se opone a que suban los precios de quienes han sido afectados por alzas previas. En estos momentos sostienen por ejemplo los industriales de la leche que eso es lo que a ellos les ocurre. El Estado se niega a autorizarles aumentos de precios “suficientes”. (En estos días les concedieron otro 40%). Pero a la vez aprueba la elevación del sorgo, la soya, la energía eléctrica, la gasolina, etcétera. Y en tales condiciones, los productores empiezan incluso a vender sus vacas lecheras como carne, y depositan su dinero en el banco para obtener cómodamente y sin problemas una alta tasa de interés.³

Los empresarios proponen una política flexible y “adecuaciones de precios” que consideran urgentes. Pero “flexibilidad” y “adecuaciones” significan en realidad precios más altos para aquello que producen y venden. La inflación

² “. . . el control de precios, cuando se atraviesa por una etapa de inflación — se dice —, no sólo lleva a aumentarla sino que, además desalienta la producción de los bienes que el Estado suele considerar más necesarios socialmente y aumenta la dependencia del país con el exterior. . .” Y no sólo eso. Tal política invita asimismo a otorgar subsidios, reduce los ingresos reales del gobierno y obliga a echar mano de la emisión inflacionaria de medios de pago. *Inflación*. . . , p. 388.

³ *El Día*, Metrópoli, 8 de enero de 1984.

“tenderá a la baja —asegura la CONCAMIN— en tanto exista una mayor liberación de precios. . .”⁴ Mas lo cierto es que desde hace un año se liberaron alrededor de 2 500 artículos y se suavizó la vigilancia de 200, dejándose bajo el régimen de control 300 que se consideraron básicos y cuyo precio sólo puede elevarse si el gobierno lo autoriza expresamente, y pese a todo ello, la inflación ha seguido adelante y ni un solo artículo se ha estabilizado.

Pretender en tales condiciones, como suelen hacerlo los defensores de esa política, que el avance consiste en que los precios subieron en el año recién concluido sólo 81%, equivale a esgrimir un argumento débil y poco convincente, pues nada hay que autorice a pensar que los precios debían supuestamente haberse duplicado de nuevo. La tasa ligeramente menor de inflación del año 83, en realidad sólo tiene sentido si se recuerda que es acumulativa y que por tanto lo que significa es que si el precio de un artículo al concluir 1981 era digamos de mil pesos, al año siguiente se elevó a 1 980 y al cierre de 1983 a 3 583 pesos, o sea que subió prácticamente 3.6 veces en el brevísimo lapso de dos años. Y si bien en términos relativos la tasa de inflación se redujo, en números absolutos —que son los que importan porque lo que se compra se paga en pesos y no en porcientos—, el incremento del artículo considerado fue de 980 pesos en 1982 y de 1 603 pesos en 1983. Lo que de paso muestra qué engañosas pueden ser las cifras y por qué no podemos cantar victoria ante el leve descenso del ritmo de aumento de los precios.

— Las dos posiciones anteriores y la que subraya que lo esencial para combatir la inflación es producir más y que esto sólo puede hacerse si hay “confianza” de los productores y en particular de los grandes empresarios, que son quienes aportan la mayor parte de la producción, tienen un común

⁴ *El Día*, 11 de diciembre de 1983.

denominador que consiste en sugerir que lo que importa es asegurar a los capitalistas una buena tasa de ganancia, pues en un sistema de mercado ésta es el regulador más eficiente de la producción. Pero si bien tal argumento tiene cierta lógica — digamos la extraña lógica del capital, al que en efecto sólo interesa el lucro —, tampoco es convincente porque lo cierto aquí es que, entre 1978 y 1981 en particular, las tasas de beneficio fueron muy altas y por tanto las condiciones en que operó el capital muy ventajosas. Y sin embargo en el curso de esos cuatro años de auge los precios subieron primero alrededor del 15%, después 30% al año y finalmente a las altísimas tasas que antes recordamos, de 98% y 81%. En el fondo el argumento de la “confianza” es simplista, parcial y falso. Supone en realidad que el factor decisivo de la producción es el capitalista y que éste sólo invierte si el “clima” que lo rodea es favorable, es decir, uno que le ofrezca pingües beneficios. Pero bajo el dominio del capital monopolista y en particular del capital monopolista de Estado, desde hace mucho tiempo y concretamente bajo la actual crisis el precio y las ganancias de monopolio no bastan para hacer crecer satisfactoriamente la economía y menos para mantener precios estables que impidan la inflación. Más bien a la inversa, lo que tales precios y ganancias generan es, precisamente, inflación.

— Otra opinión que se escucha a menudo en esferas privadas es aquella según la cual lo que se requiere para combatir la inflación y en general la crisis adecuadamente es asegurar a los particulares la máxima libertad de empresa. En rigor esta es una opinión esencialmente apologética y de un liberalismo obviamente anacrónico y trasnochado. Sin reparar en las causas profundas, propiamente históricas, que determinan que la libre concurrencia origine en un momento dado a su contrario, o sea el monopolio y más adelante la estrecha relación de éste con el Estado, lo que tal opinión hace es idealizar la libre empresa y repetir que

la máxima libertad y la menor interferencia del Estado en todos los campos: el de la producción, los precios, la determinación de los salarios, la distribución, las utilidades, etcétera, son la condición para que el proceso económico se desenvuelva de manera armoniosa y sin bruscas oscilaciones. O sea que en vez de enfrentarnos a los problemas como son y en el marco real en que se producen, debiéramos volver al pasado, hacer lo que en otros tiempos y bajo otras condiciones se hizo, como si la historia fuera reversible y los más graves problemas pudieran resolverse recreando artificial y efímeramente condiciones que ya no volverán a darse.

En el fondo, sobre todo en un momento de crisis cíclica, esta opinión se caracteriza además por su ortodoxia, es decir porque postula que el Estado no debe interferir con el mercado y porque supone que si se deja en completa libertad a la empresa privada, a la manera digamos clásica, ésta puede dejar a su vez que la crisis misma y las duras leyes del sistema se encarguen de desvalorizar y aun destruir físicamente capital, y a través del desempleo, la baja en los precios y sobre todo en los salarios y una dura competencia que elimine a los más débiles e ineficientes, de recrear las condiciones que hagan posible renovar capital fijo y reiniciar un nuevo ciclo de expansión. Pero lo que se olvida es que la caída coincide ahora con una severa inflación y que incluso una política abiertamente contraccionista no logra hacer bajar los precios como antaño.⁵

— En círculos privados suelen expresarse otras opiniones sobre la inflación y qué hacer frente a ella. En general empero son menos representativas que las anteriores y por ello a

⁵ Estos conservadores puntos de vista son a menudo compartidos por funcionarios del Estado. "La inflación, como fenómeno persistente y de desequilibrios del mercado —señala por ejemplo Sergio Ghigliazza, del Banco de México—, cobra mayores proporciones cuantas más interferencias con el mecanismo del mercado existan. . ." *Inflación*. . . p. 399.

menudo no pocos las impugnan. Se oye decir por ejemplo que el costo del dinero es ya prohibitivo y que mientras persistan las actuales tasas de interés, el empresario no podrá hacer uso del crédito que requiere. Pero además de que los inversionistas señalan a su vez que dichas tasas deben ser altas pues de otra manera no podría estimularse el ahorro, la captación bancaria sería insuficiente y el financiamiento tendría que descansar en fuentes inflacionarias, lo cierto es que al menos en tiempos de crisis, aún a precios mejores, la demanda de crédito está condicionada por el bajo nivel de la actividad económica toda y por tanto no es bajando el tipo de interés como puede eficazmente estimularse la inversión.

— *¿Cuál es la posición del gobierno?*

Quizá debemos empezar por reiterar que las posiciones oficiales no son privativas de los funcionarios del gobierno. A menudo se advierten también en círculos privados, entre profesionistas e intelectuales e inclusive en el movimiento obrero. Y por otra parte, más que una posición única, en el aparato estatal hay en realidad posiciones diferentes, aunque en público todos dan en general la impresión de estar siempre de acuerdo con las líneas oficiales y en particular con lo que dice el presidente de la República, o en su caso el funcionario superior correspondiente. Pero esto es en buena medida apariencia y demagogia.

Bajo el gobierno de Miguel de la Madrid, la política para hacer frente a la inflación se inscribe en el Plan Nacional de Desarrollo y especialmente en la llamada estrategia de "reordenación económica", que en realidad corresponde en lo fundamental a las líneas conservadoras del Fondo Monetario Internacional. Según se ha dicho a menudo, en tratándose de la inflación, problema que se considera el más grave por ahora, el gobierno no pretende suavizarla o solamente

controlarla: lo que busca es abatirla y eliminarla. Para lograrlo — se señala — ataca sus causas y no solamente sus manifestaciones a través de una estrategia que entrelaza acciones a corto y largo plazo, las primeras destinadas a asegurar las condiciones mínimas necesarias para el funcionamiento normal de la economía, y las segundas — o estrategia del “cambio estructural” — que tratan de restablecer equilibrios fundamentales hoy seriamente afectados, o de crear situaciones nuevas que hasta ahora no pudieron realizarse, y que son también necesarias para modificar a fondo la estructura económica y lograr un desarrollo firme y vigoroso que lleve a una “sociedad igualitaria”.

Los propósitos del gobierno, como se ve, son en verdad ambiciosos.

“Aceptar. . . convivir con la inflación — se dice en el Plan Nacional de Desarrollo — es dañar las bases del crecimiento y del empleo. . . Abatir la inflación es, por tanto, además de un objetivo económico, un imperativo político y social”.⁶

Pues bien, para alcanzar este objetivo el Plan propone diversas medidas:

1) Para adecuar la demanda al potencial de la oferta se recurre a la reducción del déficit fiscal del sector público, al desaliento del consumo suntuario, una política de tasas de interés que fomente el ahorro privado y la elevación de precios y tarifas de ciertos bienes y servicios.

El plan aclara sin embargo que no puede aceptarse que “la reducción del déficit se alcance a través de un recorte presupuestal indiscriminado. . .” La racionalización del gasto no excluye, sino al contrario, el aumento de los ingresos, que por ahora procede principalmente de la elevación del IVA y de los más altos precios de lo que el Estado produce. El gobierno reconoce que, a corto plazo, esta política

⁶ Poder Ejecutivo Federal. *Plan Nacional de Desarrollo*. México 1983, p. 121.

entraña una presión inflacionaria, pero asegura que a plazo medio contribuirá a reducir la tasa de inflación. ¿Por qué? Porque "si el Estado no dispone de ingresos reales suficientes. . . debe recurrir en forma repetida a la creación de dinero y consecuentemente al financiamiento inflacionario de su déficit. . ." ⁷ El ajuste de precios y tarifas, en cambio, "al permitir un financiamiento sano del gasto, suprime una de las causas de la permanencia y aceleración de la inflación".

2) El gobierno se propone, además, mantener los subsidios sobre todo a los productos básicos, mejorar los sistemas de abasto, reducir los gastos administrativos y lograr austeridad en el gasto corriente en su conjunto para fortalecer el ahorro público y reorientar la inversión. Para estimular el ahorro privado se están pagando altos intereses a los depositantes y tenedores de valores de renta fija.

3) Del lado de la oferta, la política oficial tiende fundamentalmente a apoyar la planta productiva y el nivel de empleo, y a contribuir a lograr la estabilidad en el mercado de cambios.

En resumen, según la versión del gobierno, la estrategia de reordenación económica, "al mismo tiempo que permite abatir la inflación y la inestabilidad cambiaria busca. . . distribuir con equidad la carga del ajuste necesario. . . y sentar las bases para el logro de un desarrollo sano y sostenido. . ." y se propone además reorientar el gasto público para asegurar el mayor nivel posible de empleo y recuperar la capacidad de crecimiento. El solo fortalecimiento del ahorro interno se considera "un cambio estructural importante", pues "el sistema económico se volverá así menos susceptible a crisis recurrentes, al abatirse el problema de la insuficiencia financiera interna y del impacto de los cambios en las condiciones externas" y la política cambiaria y de co-

⁷ *Ibid.* p. 122.

mercio exterior “permitirán sentar las bases para una mayor racionalidad del aparato productivo. . .”⁸

A más largo plazo, el gobierno confía en que la estrategia de “cambio estructural” hará posibles transformaciones de fondo, a partir de seis orientaciones principales, a saber: dar prioridad a aspectos sociales y redistributivos del ingreso, reorientar y modernizar el aparato de producción y distribución, descentralizar geográficamente el desarrollo socioeconómico, destinar los recursos financieros disponibles a actividades prioritarias, ampliar y utilizar mejor el potencial de desarrollo y fortalecer la rectoría del Estado sin dejar de estimular a los sectores privado y social.

Al cierre de 1983, el gobierno hizo un balance de su primer año de gestión, y en una segunda “carta de intención” al Fondo Monetario Internacional anunció que, en lo fundamental, durante 1984 se seguirá la misma política que hasta ahora. Según el gobierno tal política ha dado los frutos que de ella se esperaban, es decir: se logró reducir el déficit financiero del “sector público”, se incrementó a precios corrientes la captación bancaria, se corrigió el desequilibrio de la balanza comercial y de pagos y aún se obtuvo un cuantioso saldo favorable, se renegoció la deuda exterior pública y privada, se mantuvo una política cambiaria flexible y se logró reducir apreciablemente la tasa de inflación.

— *¿Qué representan estos ajustes en la lucha contra la inflación?*

Es difícil evaluar con objetividad los logros anteriores. El Director del Banco de México ha dicho que de no ser por la política puesta en práctica, los precios habrían subido tres veces más. Y posiblemente hubiese sido así, aunque tal afirmación no deja de ser especulativa. Frente a ella podría

⁸ Ibid. p. 124.

recordarse que en vez del 50%, en que según las iniciales previsiones subirían como máximo los precios, lo hicieron 80%, mientras que en los EUA y otros países capitalistas industrializados sólo aumentaron entre 4 y 9%. Pero lo que es indudable es que un alza de los precios de más del 80% en un solo año es un grave problema, un dato que por sí solo exhibe las duras condiciones en que está viviendo el grueso del pueblo mexicano, y todo menos un triunfo que podamos celebrar alegre e irresponsablemente.

El superávit de la balanza comercial es desde luego digno de tenerse en cuenta. Pero lo que fundamentalmente lo explica es que el petróleo siguió siendo fuente de elevadas exportaciones y que si bien otras actividades no lograron aumentar sus ventas al exterior, nuestras compras se desplomaron no tanto en respuesta a una política mejor que la previa, sino a la severidad de la crisis y al descenso sin precedente de la producción y el ingreso nacionales en nuestro país.

La deuda exterior, ciertamente, se renegoció; pero no porque el prestigio financiero del deudor sea muy grande sino porque el gobierno mexicano adoptó una política de aquellas que satisfacen al Fondo Monetario Internacional y a los bancos extranjeros acreedores que tienen ya mucho que ganar y también mucho que perder en México, y porque digase lo que se diga, en más de un aspecto esa política tiene un corte monetarista y reaccionario toda vez que en buena parte deja al curso digamos "normal" de la crisis cíclica restablecer las condiciones que hagan posible la recuperación, otorga el máximo de facilidades al capital y sobre todo al capital monopolista nacional e inclusive extranjero, y deja caer sobre los trabajadores, no sólo sobre los desocupados sino incluso sobre aquellos que siguen con empleo, el mayor peso del reajuste.

La política cambiaría flexible a la que algunos funcionarios atribuyen quién sabe cuantas virtudes y que se relaciona

estrechamente con la lucha contra la inflación, por lo pronto hizo que el tipo de cambio del peso bajara primero de 25 a más de 100 y ya con este gobierno del ya inquietante nivel de alrededor de 110 a 170 pesos por dólar. Y habría que ver con cuidado hasta dónde es cierto que este tipo de cambio al que acompaña una severa inflación interna, ha fortalecido realmente la capacidad competitiva de la industria mexicana y contribuido a que en adelante se recobre la estabilidad del mercado de cambios, pues en estos días se ha asegurado que las casas de cambios no sólo no cumplen con las disposiciones legales respectivas sino que participan en operaciones especulativas y aun apoyan envíos de dólares, oro y plata a los Estados Unidos, con la complacencia de bancos ahora nacionalizados que niegan a sus clientes las divisas que estos requieren mientras auspician su fuga al extranjero.⁹

El gobierno declara que ha "penalizado" fiscalmente el consumo suntuario; pero lo cierto es que el aumento del IVA poco o nada afecta a quienes en plena crisis tienen dinero de sobra para gastar en múltiples bienes y servicios innecesarios y aún de lujo que contrastan con la dramática miseria de millones de compatriotas en el que hoy más que nunca es el país de la desigualdad. La política de altas tasas de interés, por su parte, si bien contribuye a estimular el ahorro en ciertas capas de la población, promueve al mismo tiempo el gasto improductivo de quienes reciben enormes pagos por concepto de intereses que encarecen el financiamiento del gobierno y los numerosos empresarios que requieren del crédito bancario. Y la política de "austeridad", que sobre todo en el marco de la "renovación moral" debiera expresarse en un comportamiento distinto y verdaderamente austero de los funcionarios públicos, especialmente cuando éstos reclaman "moderación" a los trabajadores en sus demandas salariales, en realidad lo que exhibe es

⁹ (Véase *Excelsior*, 10 de enero de 1984, p. 1.

que tales funcionarios siguen siendo privilegiados, y que hasta los modestos diputados disfrutan ya de sueldos altísimos, para no mencionar a quienes ganan ya 300 mil, 400 mil, medio millón de pesos y más, mensualmente. Todo lo cual, lejos de que sea una sólida base para asegurar el éxito en la lucha contra la inflación, más bien la promueve y la estimula, y deja ver que las palabras son a menudo sólo eso: palabras que no corresponden a los hechos.

— *¿Qué sugiere hacer el movimiento obrero?*

La verdad es que, a diferencia del Estado, que buena o mala tiene una estrategia bien definida para enfrentarse a la crisis y concretamente a la inflación, el movimiento obrero deja ver que en su seno hay muy diversas posiciones.

Algunos señalan con frecuencia que sólo una escala móvil, o sea un sistema de ajuste conforme al cual los salarios se revisen y restablezcan a medida que suban los precios, podría proteger a los trabajadores y evitar la pérdida cotidiana en su poder de compra. Pero mientras unos piensan así, otros objetan tal posición y sostienen que una escala móvil sería inflacionaria, o simplemente la consideran inviable. Recientemente algunas organizaciones sindicales y aún la CTM hablaron de que, para conseguir el aumento de emergencia propuesto a mediados de 1983, habría que llegar inclusive a una huelga general, que desde luego no estalló. Pero lo que es significativo es que apenas se sugirió tal medida, otras centrales la rechazaron, alegando que una huelga de ese tipo desarticularía el sistema económico y traería consecuencias lesivas para los trabajadores.

Entre el movimiento obrero llamado independiente y las organizaciones afiliadas al Congreso del Trabajo se advierten diferencias de diverso alcance, entre las que probablemente destaca la posición de uno y otras frente a la política del Estado, pues mientras el primero tiende en general a

discrepar de ella, el CT, aun no aceptando ciertas medidas, apoya tal política en sus líneas más importantes.

Sin pretender recoger aquí todas las demandas del movimiento obrero podría decirse que entre las principales que se sugieren para contrarrestar la inflación, destacan la exigencia de mejores salarios, el rechazo a la política de topes rígidos, la lucha por mayores prestaciones, y porque al menos los precios de los productos básicos se mantengan lo más estables que sea posible y su abastecimiento se mejore en beneficio de los consumidores. Con frecuencia se acusa en particular a los comerciantes e intermediarios de ser los principales responsables de la inflación. En el 98 Consejo Nacional de la CTM se propuso, por ejemplo, crear un organismo "integrado por trabajadores, inquilinos y consumidores que vigile el movimiento de los precios, la reetiquetación, la calidad de las mercancías, denuncie el acaparamiento y lleve a cabo, si es necesario, acciones de presión contra los comerciantes".¹⁰ En la misma reunión se acordó pedir medidas más eficaces de protección del consumidor, crear un verdadero sistema nacional de abasto, impulsar la construcción de viviendas, evitar el alza desmedida de las rentas y establecer la semana de cuarenta horas en 5 días laborables.

La propia CTM ha reiterado la necesidad de un Pacto de Solidaridad que obligue a patrones y trabajadores a moderar sus demandas y al gobierno a regular los precios, pero a la vez recientemente insistió en que ese Pacto ha sido violado por los empresarios, quienes elevan precios, faltan a sus compromisos y dejan que los trabajadores sean las víctimas de la crisis. La central obrera apoya la política gubernamental pero considera "que es urgente una acción más enérgica. . . para la puesta en marcha de un sistema nacional de protección al salario y. . . de comercialización social (que incluya). . . los bienes y servicios mínimos irrenunciables

¹⁰ En *Ceteme*, 5 de marzo de 1983.

para todo trabajador y su familia: alimentación, habitación, salud, vestido, transporte y educación. . .”¹¹

Con frecuencia se insiste en que, desde luego a cambio de exigir responsabilidades, el Estado apoye a la pequeña y mediana empresa e impulse el sector social de la economía, y aún se sugiere que los sindicatos obreros mismos adquieran y manejen empresas que produzcan artículos básicos, lo que desde luego “no atenta contra el sistema de economía mixta, del cual el movimiento obrero es muy respetuoso. . .”¹² Se habla también de que las organizaciones obreras comprarán grandes volúmenes de maíz, frijol y otros productos básicos y que se habrá de cumplir “con el compromiso de evitar el intermediarismo mediante la distribución directa de básicos a los trabajadores y al pueblo en general”.¹³

Independientemente de medidas concretas como las antes señaladas, en el movimiento obrero se expresa a menudo, en lo que en realidad es una variante de una de las explicaciones burguesas de la crisis, que ésta es esencialmente fruto de un “modelo de acumulación” inadecuado. “El modelo económico de los últimos años — dice por ejemplo Fidel Velázquez — ha estimulado y protegido al sector privado. . .”, y al que es necesario estimular es al sector social, que según la COR “puede representar una alternativa válida, pues al no tener la ganancia como único móvil, puede ser más sensible a los propósitos del Estado y a las necesidades del desarrollo nacional”.¹⁴

En un reciente, importante documento del Congreso del Trabajo se insiste en tal posición, que en realidad estaba ya presente en el “Manifiesto a la Nación” de 1979. En él, al

¹¹ *Ibid*, p. 3.

¹² *Uno más uno*, 20 de marzo de 1983.

¹³ *El Financiero*, 29 de marzo de 1983.

¹⁴ *Uno más uno*, 17 de marzo de 1983.

resumir los principales “postulados y demandas” del Congreso del Trabajo se subraya “la necesidad de cambiar el modelo de acumulación privilegiante de la iniciativa privada en favor de los sectores público y social de la economía. . .”, pues tal modelo, vigente durante décadas, “evidenció hasta la saciedad su incapacidad para satisfacer las necesidades . . . básicas del pueblo”. “La clase obrera entiende entonces que la lucha no estriba sólo en atacar lo que hace patente la crisis: la deuda externa, la inflación, el déficit público, etc., sino en transformar el modelo económico que la originó. El reto es el cambio estructural y la crisis es oportunidad para realizarlo”. “Un modelo de vida que elimine la indigencia y modere la opulencia”, es la demanda central de las organizaciones sindicales afiliadas al Congreso del Trabajo.¹⁵

Y ¿cómo lograr ese nuevo “modelo”? Fundamentalmente, según el CT, a través de la aceleración de la reforma agraria, la reorientación y defensa del aparato productivo y del empleo, el fomento del sector social de la economía, la ampliación del mercado interno, principalmente a través de mejores salarios e ingresos para trabajadores y campesinos, el reforzamiento del carácter popular, nacional y revolucionario del poder y la expulsión de su seno de los representantes de las fuerzas reaccionarias que lo han infiltrado. . . ,” la mayor participación de los trabajadores en la toma de decisiones y el desarrollo de un sistema educativo que exalte el valor del trabajo.

El Congreso del Trabajo plantea cuestiones importantes, levanta justas demandas y sugiere reformas significativas, todo lo cual muestra su desacuerdo con ciertas líneas burguesas, pero su posición suscita a la vez ciertas dudas no fáciles de aclarar. La primera podría ser esta: ¿cómo es posible que se declare por un lado que el gobierno es “revolu-

¹⁵ *El Día*, 5 de diciembre de 1984.

cionario” y que por el otro el “modelo” de desarrollo imperante haya favorecido durante las últimas décadas no al pueblo, el que no pudo siquiera satisfacer sus necesidades esenciales, sino a lo que el CT denomina la “iniciativa privada”, o sea a los negociantes ricos?

¿Cómo explicar concretamente que esa estrategia de desarrollo, lesiva a los intereses populares, se mantuviera en acción no durante semanas o meses, o siquiera en un año aislado sino a lo largo de nada menos que cuatro decenios, a los que objetivamente habría que añadir los años más duros de la dictadura callista?, y ¿por qué considerar que la inflación y en conjunto la actual crisis son producto de ese “modelo” inadecuado, es decir que fue fundamentalmente una política, una estrategia, una forma de funcionamiento determinada del sistema económico, y no contradicciones más profundas y aun leyes históricas de mayor alcance las que provocaron los graves desequilibrios que hoy aquejan a la economía y aún a la sociedad mexicana en su conjunto?

¿En qué apoyar sólidamente la idea de que, lo que hasta ahora no pudo hacerse ni siquiera bajo los dos o tres gobiernos que en las últimas décadas se ostentaron como liberales, sí podrá realizarse bajo una administración conservadora como la del presidente de la Madrid? ¿Hay, por ejemplo, las condiciones para impulsar una reforma agraria que de hecho —salvo alguna medida aislada como la afectación echeverrista de unos cuantos latifundios en el valle del Yaqui en 1976— está abandonada desde hace casi 45 años?

¿Se considera viable una política de estímulo a la expansión del mercado interno a partir de mejores condiciones de los trabajadores y el campesinado, cuando la sola inflación del 80% y 100% está haciendo cada vez más regresiva la distribución del ingreso, y la política de salarios es una que incluso tiende a acentuar la explotación de los trabajadores?

Y sobre todo: ¿se considera posible reforzar el carácter “revolucionario” del gobierno y expulsar de su seno a los elementos “reaccionarios” que según el CT lo han “infiltrado”? El lindero entre lo “revolucionario” y lo “reaccionario” suele ser, cuando tales términos se manejan con imprecisión y en forma un tanto retórica, difícil de establecer. Pero si se pensara por ejemplo que sólo gracias al peso decisivo de los elementos más conservadores fue posible mantener durante décadas una estrategia perjudicial para el pueblo y favorable a sus explotadores, ¿cómo librarnos de tales elementos? ¿Será correcto y sobre todo realista sugerir que se “infiltraron” a un gobierno que sin ellos habría sido genuinamente popular y revolucionario? ¿se infiltraron por ejemplo los Portes Gil, los Abelardo Rodríguez, los Avila Camacho, los Alemán, los Díaz Ordaz, para no mencionar los centenares de altos funcionarios que en los últimos cuarenta años se distinguieron por sus posturas conservadoras y muchos de los cuales incluso se enriquecieron escandalosamente y hoy viven como latifundistas urbanos a quienes envidiarían los científicos porfirianos, en el Pedregal de San Angel, Polanco y las Lomas de Chapultepec? ¿Se infiltraron también al gobierno los incontables gobernadores reaccionarios que hemos padecido a lo largo de años en casi toda la República, y desde luego los ricos tecnócratas que hoy encabezan varios ministerios y dirigen a algunos de los más importantes bancos recién nacionalizados?

A nuestro juicio más que haberse “infiltrado” todos esos elementos reaccionarios al gobierno de la revolución, de ésta surge un Estado burgués renovado y fortalecido, que con el correr del tiempo y el desarrollo del capitalismo mexicano se consolida como tal, y en cuyo seno no sólo están presentes sino que juegan un papel decisivo precisamente los elementos burgueses. Los trabajadores, en cambio, son quienes participan en posiciones secundarias y obviamente subordinadas a los intereses de la clase en el poder, de ahí que sea

muy difícil pensar en que su participación sea creciente y su peso cada vez mayor en los mecanismos en que se toman las decisiones económicas y políticas más importantes. Pero tengamos o no razón, lo que parece bien claro es que fincar el éxito de la lucha contra la inflación en la tesis de que el actual gobierno rompa con la estrategia defendida hasta hoy por las fracciones más poderosas de la burguesía y la oligarquía y que se expresa en el "modelo" que el Congreso del Trabajo objeta, es por lo menos muy difícil. Y creemos que los hechos se encargarán de demostrarlo, como lo hicieron siempre hasta aquí. Los hechos que según el propio Fidel Velázquez, "son totalmente desfavorables a las mayorías nacionales", y cuando el convenio del gobierno con el Fondo Monetario y concretamente la carta de intención recientemente enviada a ese organismo "significará para el obrero un tramo más de sacrificio".¹⁶

Más objetivo es probablemente el planteo de la CROC en su Declaración de Principios —aunque en realidad ésta suele adoptar y defender posiciones más débiles que las de la CTM— en el que reconoce a "la inflación como una enfermedad difícil de curar" y como un fenómeno que "aleja al país del gran objetivo nacional proclamado por la Revolución de 1910". Según ella "en la organización social mexicana existe un marco de desigualdad intolerable entre explotados y explotadores; la sociedad capitalista es injusta y contradice las aspiraciones proletarias (y el capitalismo predomina en el régimen de economía mixta que señala la Constitución); existe una gran concentración de la riqueza; la lucha de clases es la vía para que el proletariado rescate esa riqueza y el bienestar que le han arrebatado; el proletariado debe participar políticamente. . ." ¹⁷

¹⁶ *El Día*, 5 de enero de 1984.

¹⁷ Manuel Irenn Tallez, "Declaración de Principios de la CROC", *El Día*, 13 de enero de 1984, p. 4.

— *¿Qué otras cosas se sugiere hacer para enfrentarse a la inflación?*

Aparte de lo ya señalado y sin el ánimo desde luego de agotar el tema, hay muchas otras opiniones que podríamos recordar aquí, opiniones de profesionistas e intelectuales y de organizaciones políticas. Respecto a estas últimas tratamos inclusive de obtener el material más representativo y actual, pero desafortunadamente no tuvimos respuesta oportuna a nuestra solicitud, por lo que sólo nos limitaremos a algunos breves comentarios.

A menudo, como es natural, tales opiniones se acercan o son análogas a varias de las ya examinadas y no sugieren líneas de acción diferentes. Algunos por ejemplo, en general los más conservadores, se inclinan por una política económica de corte más o menos monetarista, en tanto otros, digamos los liberales, recomiendan medidas de tipo keynesiano, que admitiendo que la inflación resulta de un desequilibrio entre la oferta y la demanda, —y en su caso de los costos de producción— consideran a la vez que ésta aumenta a causa principalmente de factores no monetarios. Ahora bien, según los keynesianos, en tanto la mayor demanda impulsa el nivel de empleo y la producción ello no es inflacionario. Es desde el momento en que tal demanda no genera ya una creciente producción, o como suelen decir los economistas, cuando la inversión supera al ahorro disponible y no quedando ya capacidad ociosa empiezan a ser insuficientes los recursos reales en que descansa el proceso productivo, cuando surge la inflación. A partir de entonces los keynesianos se vuelven también en cierto modo monetaristas y reparan como el que más en el incremento de la cantidad de dinero y de la demanda global. Y si bien al descender la producción, la inversión y el nivel de empleo defienden una política financiera deficitaria, cuando la situación se invierte y no es fácil ya hacer crecer el ingreso con los recursos dispo-

nibles, se inclinan a posiciones que tratan de restablecer el equilibrio presupuestal.

Acaso la limitación principal de tales posiciones es sin embargo que, a diferencia de lo que aconteció por ejemplo en los años treinta y en general en otras crisis cíclicas, en que éstas se vieron seguidas de una vertical caída de los precios, ahora la declinación de la actividad económica coincide con una altísima tasa de aumento de los precios que hace que las medidas expansionistas que se sugieren para acelerar y dar impulso a la recuperación se vuelvan prácticamente imposibles pues son a la vez profundamente inflacionarias. Y esto es lo que parecen no comprender los liberales que con mayor entusiasmo defienden el legado keynesiano. O sea no entienden que debido al cambio en el régimen del ciclo económico, a la creciente ineficacia de los mecanismos de regulación y al carácter crónico de la inflación en esta fase del CME, resultante todo ello del agravamiento de la contradicción fundamental del sistema, lo que en otros tiempos y bajo otras condiciones fue un instrumento eficaz al menos para mitigar la crisis, hoy es ya un remedio de aquellos que resultan peores que la enfermedad que pretenden curar.

Hay otras posiciones que sólo recordaremos de paso. Con frecuencia se sugiere que los precios se congelen, lo que más que solución se antoja una verdadera ilusión, pues si el aumento desmedido, generalizado y persistente de los precios pudiera contrarrestarse impidiendo que suban y manteniéndolos estables, en verdad no habría de qué preocuparse; pero entonces tendríamos que preguntarnos cómo fue que ante un problema tan grave como la inflación no se nos hubiese ocurrido que era obviamente mejor una estabilidad que teníamos a la mano. El problema consiste en que si la inflación fuese un problema que pudiéramos resolver tan sólo decretando que los precios hasta hoy incontrolables debieran congelarse, lo habríamos resuelto desde hace mucho tiempo y no estaríamos donde estamos.

Algunos insisten en que la causa principal de la inflación son las maniobras especulativas y los abusos. De donde resulta que si se adoptan medidas resueltas para combatir tales acciones, habremos solucionado el problema inflacionario. A menudo se subraya inclusive que algunas de esas acciones son ilegales y que lo que procedería hacer es imponer cuantiosas multas y aun encarcelar a quienes violan la ley y dañan así a la sociedad. Y si bien todo ello no es deleznable e influye desde luego en el alza de los precios, en una actitud formalista se piensa que la inflación es un acto ilegal, en vez de repararse en que, en realidad — sin perjuicio de abusos y aun actos realmente delictuosos que desde luego debieran combatirse y erradicarse — expresa otro tipo de leyes históricas que en verdad son las que rigen el desarrollo y determinan las contradicciones y desequilibrios del capitalismo.

Quienes consideran que ciertos aspectos financieros de la crisis y en particular de la inflación son lo principal, sugieren a su vez medidas de otro orden. Que se deje — dicen — de pagar la deuda externa para utilizar productivamente los recursos que su servicio reclama; que se reduzcan las tasas de interés y se amplíen y liberalicen los préstamos a fin de que los empresarios pequeños y medianos hoy en dificultades, cuenten con fondos en condiciones menos onerosas que les permitan incrementar su producción; sin tomar en cuenta que bajo una crisis tan intensa como la que padecemos, el bajo nivel de la producción es consecuencia inevitable de la caída de la demanda y que mientras ésta no aumente en forma sustancial, la inversión tampoco lo hará así se otorguen a los empresarios las mayores facilidades crediticias.

Para otros en cambio, el *quid* de la cuestión consiste en decidir si ha de ser la empresa privada o el Estado quien lleve las riendas del proceso económico. Y mientras unos aseguran que aquélla, si se la deja en libertad, está en condiciones de asignar adecuadamente los recursos productivos y

asegurar un desarrollo estable, otros insisten en que sólo la rectoría económica del Estado puede en un país como el nuestro garantizar la estabilidad necesaria para un crecimiento autosostenido y que beneficie a las grandes mayorías. Mas lo cierto es que, hasta ahora, ni una ni otro ha sido capaz de tal desempeño.

— *¿Qué proponen concretamente los partidos políticos?*

En un reciente Manifiesto el PRI toma posiciones que, correspondiendo esencialmente a las del gobierno, no dejan a la vez de expresar la opinión, las aspiraciones y aun el descontento de fuerzas populares incorporadas al partido oficial y en las que al menos parcialmente se asienta la actual estructura de poder en nuestro país. En dicho documento se subraya la necesidad de superar la crisis y de llevar a cabo el “cambio estructural de nuestra sociedad”. El PRI se pronuncia en favor de las demandas de los campesinos por mejorar sus ingresos y de los trabajadores porque los incrementos en sus salarios “mantengan su poder adquisitivo y protejan las fuentes de empleo”; porque se moderen “con sentido social los ajustes necesarios”, porque no se eleven demasiado los precios de los bienes y servicios del Estado, porque se eliminen subsidios indirectos y por que no se decreten “nuevos o más altos impuestos que graven el consumo de las mayorías o que reduzcan su ingreso”. Subraya asimismo, la necesidad de aumentar la productividad y la producción, a través del mayor uso no inflacionario de la planta productiva, así como que la política alimentaria evite que la inflación afecte los niveles y la calidad de la alimentación popular, y de que se mejoren los servicios de salud, educación, vivienda, información y otros de los que depende el nivel de vida del pueblo. En cuanto a las empresas estatales, el PRI demanda “que la banca nacionalizada canalice en mayor medida y en forma preferente el crédito a actividades so-

cialmente prioritarias”, que los recursos no se concentren en pocas regiones y que se apoye más a las ahora “marginadas” y “exige el fortalecimiento de la participación estatal en áreas estratégicas y prioritarias”.¹⁸

El documento antes mencionado no aclara en realidad en qué ha de consistir el “cambio estructural” reclamado por el PRI, ni tampoco cuándo y cómo ha de lograrse ese cambio. Pero lo que es interesante es que, a diferencia de ciertos funcionarios del gobierno, el partido no apoya las líneas que pudieran considerarse más conservadoras y fondomonetaristas, y aun llama la atención acerca de la necesidad de moderar el impacto de tal política sobre las capas más amplias del pueblo. En parte esta posición muestra la habilidad táctica de los dirigentes reformistas aliados al gobierno, que pese a no simpatizar con las posiciones más reaccionarias las apoyan a menudo en la práctica, y en parte expresa discrepancias innegables y aún explicables contradicciones de clase, es decir, que los trabajadores más conscientes en las organizaciones sindicales afiliadas al Congreso del Trabajo y al PRI defienden líneas de acción diferentes de las que aprueban y ponen en marcha los altos funcionarios oficiales.

En realidad cada partido tiene una diversa explicación de la actual crisis y concretamente de la inflación. Mientras el PRI considera que, pese a sus fallas, la política del gobierno es digna de apoyo, otras organizaciones piensan de manera distinta.

En su reciente Segundo Congreso Nacional, el PSUM, por ejemplo, sostiene que “la responsabilidad de esta crisis. . . recae en los gobiernos priistas, en la gran burguesía mexicana y en los centros económicos de decisión del imperialismo”. “La actual inconformidad popular —por lo de más— no sólo tiene su origen en la crisis. . . sino principal-

¹⁸ Partido Revolucionario Institucional. Manifiesto al Pueblo de México, *El Día*, 10 de enero de 1984.

mente en la política antipopular que aplica el gobierno. Aun bajo la crisis económica —considera el PSUM— la situación podría ser otra si predominara una política distinta. Nuestro partido sostiene que esa otra política es posible y viable”.¹⁹

Dos son los objetivos que por ahora considera fundamentales el PSUM: la lucha por la democracia y la derrota de la política económica del gobierno. La primera supone, entre otras cosas “. . . la creación de un sistema parlamentario y democrático de gobierno, con cámara única y Ejecutivo controlado, como alternativa frente al sistema presidencialista y a los mitos que éste ha generado. . .”²⁰

“. . . aunque el logro de esa alternativa requiere un gobierno distinto al actual. . . la lucha por una nueva orientación económica. . . se lleva a cabo en la acción cotidiana, en las luchas concretas y en las grandes movilizaciones de masas. . .” La política que el PSUM propone “consiste en defender el ingreso y el empleo de los trabajadores, y promover la inversión productiva. . .”, lo que requiere a su vez “un programa industrial, el impulso a la producción en el campo y la moratoria de la deuda exterior”.

“La forma de lucha electoral es —para el PSUM— una de las más relevantes en el momento actual”.²¹

Otras medidas de política económica que sugiere el partido de que nos ocupamos son el control de precios y el estímulo a la producción de artículos básicos, el control de cambios, la reducción de las tasas de interés de los bancos, la redistribución del ingreso y el mejoramiento de las condiciones de vida, lo que supone una política fiscal “basada

¹⁹ PSUM. *Informe y Resoluciones del Segundo Congreso Nacional*. México, 1983, pp. 11 y 15.

²⁰ *Ibid.* p. 17.

²¹ Véase: *Ibid.* pp. 45 y 17.

principalmente en impuestos directos y progresivos. . .”, así como la ampliación y reorientación del sector estatal de la economía a través de diversas nacionalizaciones, y la restitución de la fracción XII del artículo 123 constitucional, que obligaba a los empresarios a proporcionar viviendas a sus trabajadores.²²

El Partido Mexicano de los Trabajadores coincide en parte con las posiciones anteriores y tiene a la vez sus propios puntos de vista. Según el Informe del Comité Nacional a la última Asamblea Nacional Ordinaria “la inflación tiene como una de sus causas el aumento del circulante que prácticamente se duplicó de 1980 a 1982, pero la principal son los abusos empresariales. La especulación con inventarios, la llamada reetiquetación son ejemplo de ello. Las ganancias de los empresarios, especialmente de los monopolios industriales y comerciales, son la principal fuente de la inflación. . .”

Para hacer frente a ésta el PMT recomienda luchar por aumentos de salarios, por la democracia sindical, por una reforma fiscal que grave las utilidades de los grandes empresarios, porque se nacionalicen varias industrias y por que “se abran las puertas a la participación ciudadana en las elecciones. . .”

El Partido Popular Socialista, por su lado, con frecuencia expresa también su preocupación en torno al severo proceso inflacionario que vive el país, y sugiere adoptar diversas medidas para hacerle frente. En una entrevista con el presidente De la Madrid, sus dirigentes declaran que “la inflación ha llegado a límites inaceptables, golpeando duramente la economía del pueblo. . .”, y añaden que “Nos parece que no son caminos adecuados la contracción económica, el mayor control del circulante, la restricción a los salarios, la elevación de las tasas de interés. . . Creemos que debe crecer la

²² *Ibid.* pp. 72-74.

inversión y la producción. . .” Y en la propia entrevista sugieren un programa que entre otras cosas debiera incluir una “verdadera reforma fiscal”, “combatir con medidas no monetarias la inflación”, escala móvil de salarios, semana de 40 horas y “apoyo decidido de parte del Estado a la pequeña y mediana industria. . .”

Unos meses más tarde, en el 75 Pleno del Comité Central del PPS se adopta una resolución en la que se expresa que “Sin duda, la situación nacional es sumamente grave, la inflación no se ha detenido; la deuda externa aumenta; el desempleo se agrava; la planta industrial trabaja a menos del 50% de su capacidad y las grandes masas populares están siendo víctimas de una política que las empobrece más y que las lleva a la desesperación y la miseria”.

En dicho documento el PPS critica a algunos funcionarios del gobierno y “exige la inmediata destitución” de los Secretarios de Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y la Reforma Agraria por sus “posiciones contrarrevolucionarias”. Según el PPS tales funcionarios mantienen posiciones contrarias a las del Presidente de la Madrid. Y como solución política este partido subraya que “han madurado las condiciones para modificar la composición del Estado mexicano (y) que es indispensable que la clase obrera y todas las fuerzas y sectores antimperialistas y democráticos ocupen posiciones dentro del Poder Público, conformando un gobierno de Democracia Nacional. . .”²³

Como el lector habrá observado, esta posición coincide en buena parte con las del sindicalismo afiliado al Congreso del Trabajo, que como ya vimos propone “expulsar” del gobierno a los elementos “reaccionarios” que se han “in-

²³ PPS. Revista *Combatiente*, 15 de marzo de 1983, pp. 43-45, y *Cuadernos de Educación Política*, No. 8, Informe de la Dirección Nacional al Comité Central en su sesión solemne del 18 de junio. México, agosto de 1983, pp. 46-53.

filtrado" en su seno. El PPS va probablemente incluso más lejos, pues considera —y ojalá tuviera razón— que hay condiciones maduras para que la clase obrera y las fuerzas antimperialistas tomen posiciones decisivas en el gobierno y para que éste reoriente su acción en beneficio del pueblo. Desafortunadamente, los hechos no parecen compadecerse con tan buenas intenciones.

El Partido Acción Nacional, por su parte, considera que el principal responsable de la inflación es el gobierno. "El déficit del gobierno —señala a menudo— . . . es la causa más importante del agravamiento de la inflación." Y añade: "La grave corrupción gubernamental constituye también una fuerte presión inflacionaria, al aumentar la intermediación por el influyentismo y los costos de las obras públicas."

Pues bien, ¿se puede atacar con éxito la inflación y superarla a corto plazo? Según el PAN no es viable hacer tal cosa. "Cuando ya se ha entrado en un proceso inflacionario es imposible, y no recomendable por las consecuencias que traería para el empleo y el crecimiento económico — dice —, detener de golpe la inflación, pero es necesario reducir su ritmo paulatinamente, a fin de que las tasas inflacionarias sean menores cada año hasta llegar a ritmos soportables, sin riesgos extraordinarios para el sistema económico." En lo que por cierto el PAN parecería coincidir con la actual política del gobierno, que aspira a suavizar gradualmente la presión inflacionaria.

Acción Nacional, no obstante, señala que de llegar al poder pondría en marcha una política que entre otras cosas se propondría: Ajustar el gasto público al presupuesto aprobado por el Congreso, reducir y hacer más eficiente la administración pública, eliminar el financiamiento inflacionario del déficit gubernamental; jerarquizar las inversiones, sujetar el control presupuestal a todas las empresas paraestatales, organizar a las que operan con pérdidas y liquidar a las

más un solo año. Lo que quiere decir que las contradicciones capitalistas se dan con especial gravedad en estos países, que a sus propios profundos desajustes agregan los derivados de una relación desfavorable con las potencias imperialistas. O en otras palabras: aparte de la succión y el drenaje empobrecedores que provocan el imperialismo y concretamente las empresas transnacionales, la burguesía "nacional" y sobre todo la oligarquía o sea su fracción más poderosa, que en realidad no tienen en el desarrollo del país más fe que los extranjeros, se encargan de dilapidar buena parte del potencial de crecimiento y de enviar al exterior recursos financieros que debidamente utilizados contribuirían sin duda a un desarrollo más rápido y estable, y desde luego a combatir la inflación. Pero los dueños del dinero prefieren tenerlo "a salvo" en la metrópoli.

Aun como fenómeno fundamentalmente económico, la inflación ha cambiado y no es ya lo que antes. Tradicionalmente, aparte de darse en coyunturas especialmente difíciles como la que vivieron Alemania y otros países europeos después de la Primera Guerra Mundial, la inflación fue característica de las fases de auge cíclico, sobre todo cuando la actividad cobró mayor impulso. Mas apenas estalló la crisis, los precios bajaron y aun se desplomaron. Al menos así fue hasta la gran depresión de los años treinta. Hoy, en cambio, la inflación como ya se dijo coincide incluso con la sobreproducción, el desaprovechamiento de capacidad productiva y un desempleo masivo, lo que claramente comprueba que no es ya un rasgo de una fase del ciclo sino una constante, aunque de variable intensidad.

Lo que comprueba también, como ya se señaló en un capítulo anterior, que la inflación se ha vuelto prueba concluyente de que los viejos y aun no pocos de los nuevos mecanismos reguladores del sistema han dejado de operar eficazmente, es decir, no sólo los precios incluyendo desde luego el de monopolio sino la acción toda del Estado, su po-

lítica monetaria y fiscal, su regulación del mercado de trabajo fundamentalmente destinada a contener los salarios y a facilitar la explotación de la fuerza laboral, y aun el mecanismo "único" que bajo el capitalismo monopolista de Estado eslabona a éste y los monopolios, y que en la actual fase de la crisis general, más que un expediente suavizador de los desequilibrios y contradicciones del sistema es uno que contribuye a agudizarlos.

Todo esto demuestra a nuestro juicio que el viejo debate acerca de si la empresa privada o el Estado es quien debe regir el proceso económico, por ser el que puede garantizar un desarrollo estable y sostenido, es anacrónico e inconducente. La empresa privada es desde luego incapaz de hacerlo, y lo que dicen sobre ella sus propagandistas no se compadece con la realidad. Lo demuestra así todo el desarrollo del país: lo que ocurrió desde hace un siglo en la minería, en la industria petrolera hasta antes de la expropiación, en la eléctrica, en la siderurgia y lo que sucede hoy en industrias manufactureras relativamente nuevas como la automotriz, la de maquinaria y equipo y otras. Los empresarios particulares no tienen ni los recursos que requiere el desarrollo ni la capacidad, la imaginación, la decisión o siquiera la voluntad para enfrentar los problemas y riesgos que ese proceso entraña. Podría pensarse que el capital extranjero sí tiene al menos recursos financieros y técnicos, capacidad y experiencia para hacerlo; mas lo cierto es que no le interesa el desarrollo nacional y menos todavía si pretende ser independiente. Lo que busca es ganar más dinero, subordinar nuestros intereses a los suyos, integrar nuestras economías a la del capital monopolista transnacional y extraer, transferir y retener parte de nuestro propio potencial de crecimiento, en vez de incrementarlo con su aporte.

que no responden a programas económicos sino meramente políticos." En fin "reforzar el aparato de fiscalización del gasto y del ingreso público" y adoptar un programa "que disminuya la desconfianza crónica de los sectores entre sí y entre éstos y el Gobierno, así como las pugnas, reales o manipuladas, entre capital y trabajo, que generan climas de tensión y propician carestía y acelerada inflación."

Claramente se advierte que para el PAN es el gobierno el responsable de la inflación. La empresa privada brilla por su ausencia y ni siquiera los monopolios o los comerciantes voraces tienen que ver con el alza de los precios. Y en cuanto a la lucha de clases, a la que alude al mencionar las "pugnas" entre el capital y el trabajo, más que vérsela como expresión de la crisis y concretamente de la inflación, se la supone una de las causas de la carestía y la acelerada inflación, lo que en otras palabras significa aceptar el punto de vista reaccionario de que aun las justas demandas de los trabajadores por mejores salarios son, como acostumbran decir algunos empresarios, negativas e inflacionarias.²⁴

— *¿Qué hacer entonces frente a la inflación?*

De lo dicho hasta aquí el lector habrá comprobado que, como señalamos al principio, si algo es particularmente difícil es cerrar filas y conjugar esfuerzos ante un problema tan complejo como la inflación. Aunque no faltan quienes proceden pontificalmente y creen ser ellos los únicos que saben lo que debiera hacerse, lo cierto es que aquí no hay recetas ni fórmulas prefabricadas que valgan. De ahí que cualquier avance, por modesto que sea sólo puede resultar de esfuerzos conscientes, continuados y serios en los que se ataquen realmente las causas de los desequilibrios más graves, no a través

²⁴ Partido Acción Nacional. *Plataforma Política 1982-1988*. pp. 13 y 39-40.

de actos individuales o de medidas burocráticas aisladas o circunstanciales sino mediante acciones colectivas y aun verdaderas luchas que incorporen a las fuerzas capaces de librarlas con éxito.

Lo primero que debiera quedar claro en cualquier intento serio de combatir la inflación es la naturaleza y alcance del fenómeno así como el marco en que surge y se desenvuelve. Al respecto conviene subrayar lo que sigue:

La inflación no es, como algunos parecen creerlo todavía, un fenómeno monetario. Ni siquiera es simplemente un hecho económico sino un problema social y político, es decir, uno que además de graves desajustes económicos expresa profundas contradicciones sociales y afecta la vida política y por tanto el funcionamiento global del capitalismo. De paso éste es un segundo elemento fundamental a considerar: la inflación no es tampoco un desajuste universal que afecte por igual a los países capitalistas y socialistas sino un desequilibrio propio y aun inherente al capitalismo, o sea que resulta de un régimen anárquico de producción y que como el desempleo y en general las crisis cíclicas periódicas, es ajeno al socialismo o sea a un sistema de economía planificada. Los países socialistas tienen desde luego sus propios problemas pero entre ellos no está la inflación. Incluso es común que los precios de bienes y servicios básicos sean hoy por esos países los mismos de hace veinte o treinta años, y que los salarios reales lejos de disminuir, aumenten firmemente, asegurando a los trabajadores un nivel de vida cada vez mejor.

Si bien la inflación es propia de los países capitalistas, también es cierto que los afecta desigualmente y que los más lesionados son los países capitalistas subdesarrollados. En años recientes, si bien en algunos países industrializados los precios subieron 15%, 20% y aun cerca de 30%, en varios de Latinoamérica como Chile, Perú, México, Bolivia, Brasil y Argentina lo hicieron 50%, 100% y aún 200%, 300% y

— *¿Asegura la rectoría del Estado un desarrollo económico estable?*

En cuanto al Estado, si bien hay muchos mexicanos que de buena fe creen que su rectoría es condición para un desarrollo nacional acelerado que responda realmente a nuestros mejores intereses y permita resolver problemas como el de la inflación, la verdad es que tampoco es así. Estado y empresa privada, sobre todo cuando ésta es propiamente monopolista, son corresponsables de lo que ocurre, no en cuanto a que sean directa y legalmente los culpables, sino porque ambos tienden a preservar y reproducir el capitalismo, al que son inherentes las crisis y en nuestros días también la inflación, que desde luego no es ajena a esas crisis.

La idea de que el Estado es capaz de resolver los más graves problemas socioeconómicos es fruto de una concepción reformista, superficial y errónea. De una concepción que lo supone entidad neutral casi todopoderosa y no comprometida con la clase dominante sino identificada con los mejores intereses nacionales y dispuesta siempre a servir lealmente al pueblo. Pero esta concepción idílica que soslaya el verdadero carácter de clase del Estado, choca abiertamente con la realidad.

En estos momentos es obvio que la política con la que el Estado se enfrenta a la actual crisis y específicamente a la inflación exhibe su verdadero contenido de clase. Si bien se habla de que su principal objetivo es una sociedad "igualitaria", su significado real es otro, y a lo que de hecho contribuye — sea ese o no su principal propósito — es a hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. La negociación en torno al aumento del salario mínimo al iniciarse 1984 fue por demás reveladora: las organizaciones sindicales afiliadas al Congreso del Trabajo, o sea no los sindicatos independientes más o menos hostiles al gobierno sino aquellos que

militan dentro del PRI y son en rigor parte del aparato oficial, pretendían un aumento mínimo de 40%, el que no sólo no era excesivo sino que quedaba bien atrás de la elevación de los precios. Algunos empresarios privados inclusive vieron la demanda obrera como razonable, aunque desde luego deseaban que el ajuste fuese el mínimo posible. Pero cuando las partes se acercaban a un arreglo, el gobierno, al margen de los mecanismos en que en torno a la Secretaría del Trabajo se dirimen habitualmente estas cuestiones, dejó sentir su peso decisivo e impuso por otros canales y a partir de consideraciones políticas el “tope” de 30%, que naturalmente no fue bien recibido por algunos dirigentes y menos por los trabajadores. Al parecer no faltaron quienes se empeñaban en no ceder ante la decisión oficial. Pero ésta era inapelable.

El gobierno repite a menudo que su política no es ortodoxa y menos una que responda a la presión y a las concepciones reaccionarias y antediluvianas del Fondo Monetario. Desde luego este es motivo de alivio pues a lo largo ya de muchos años, los países en que se aplicaron las recetas del FMI han comprobado que los llamados “programas de estabilización” de dicho organismo, que supuestamente debían impulsar un sano desarrollo económico a partir de políticas contraccionistas, bajos salarios y ayuda generosa al capital privado, incluyendo el transnacional — todo ello como condición para poner primero “la casa en orden” —, en la práctica a lo que llevaron a menudo fue a debilitar las economías internas, a entronizar regímenes políticos profundamente antidemocráticos y a que el pueblo pagara un precio desmedido por una estabilidad que a la postre no se consiguió, pues lo cierto es que la estabilidad depende fundamentalmente del desarrollo y no éste de aquélla, y menos todavía del estancamiento.

Hasta ahora sin embargo, lo dominante en la política económica del gobierno, aun si ésta fuera fruto del convencimiento de los altos funcionarios de que es la mejor o al me-

nos la única viable, se acerca grandemente a las posiciones del Fondo Monetario, sobre todo en cuanto al énfasis que pone en la reducción del déficit financiero del gobierno, la estabilidad monetaria aunque en la práctica el peso valga cada vez menos, la contención de las demandas salariales y sobre todo la negociación y el pago de una deuda exterior estratosférica, onerosa y fruto en buena parte de la irresponsabilidad, el triunfalismo, la corrupción y el saqueo por parte de los ricos de que el país fue víctima en años recientes y lo sigue siendo hoy, y cuyo arreglo debiera subordinarse a las exigencias del desarrollo y a las necesidades de la nación y del pueblo. Pero como van las cosas parece indudable que será precisamente el pueblo el que pague los vidrios rotos, y el que aun de lograrse reducir la tasa de inflación al 40% que anuncia el gobierno — lo que por cierto es bien difícil — esto sea así no porque la política en marcha lo consiga sino porque la recesión sea muy severa, en cuyo caso los trabajadores y sobre todo aquellos que pierdan su empleo serán de nuevo los más dañados. Ciertamente que a menudo se habla de que para reequilibrar a nuestra economía será además necesario lograr cambios estructurales. Mas cuando éstos se mencionan en realidad no se sabe en qué consisten, cuál será su alcance, cómo habrán de realizarse y por qué se asegura que serán suficientes para superar y aun eliminar en definitiva a la inflación, como entusiastamente se nos promete. Y los funcionarios dan además la impresión de que tan importantes cambios no serán fruto de una lucha sino más bien de medidas burocráticas y palaciegas que ellos mismos decreten desde sus altos puestos. Algunos en particular no ocultan su temor a la lucha de clases y reveladoramente postulan que tal lucha es desquiciante del orden, que entraña una presión inflacionaria sobre los recursos disponibles y que debiera evitarse, pues la armonía y la unidad son necesarias para restablecer la estabilidad.

— *¿Puede corregirse la inflación mediante la regulación de salarios y utilidades?*

Desde posiciones liberales de corte más o menos “populista” o “subconsumista” se señala a menudo, en el fondo con un simplismo análogo al de las posiciones más conservadoras que postulan lo contrario, que para contrarrestar la inflación y aun superar la actual crisis lo que debiera hacerse es elevar los salarios. Según esta opinión la crisis obedece a que la capacidad de compra de los asalariados es insuficiente y por ello el mercado interno demasiado pequeño. Bastaría entonces aumentar ese poder de compra para que el mercado se expanda con rapidez, la demanda se fortalezca y la producción y la inversión se multipliquen.

A semejanza de las explicaciones neoclásicas que siempre dan por supuesta una demanda suficiente para que la producción crezca a un ritmo satisfactorio, ésta que cree que un aumento de salarios bastaría para estimular el mercado interno y producir y vender sin dificultad lo que ahora no se produce o nadie compra, en verdad no es menos simplista y superficial, primero porque toma los salarios no como un elemento de la contradicción capital-trabajo ni como una variable dependiente que en realidad resulta en gran parte del propio proceso de acumulación, sino como algo que al parecer podría elevarse sin mayor dificultad ni resistencia patronal. Y por otra parte, la concepción del mercado interno que subyace a tal explicación es no menos insatisfactoria, pues lejos de concebirlo como una compleja categoría histórica en cuyo desarrollo juega también el proceso de acumulación un papel muy importante, lo ve parcial y unilateralmente como si el consumo de los trabajadores fuera en realidad la variable clave de su crecimiento y el antídoto más eficaz de la inflación.

Una posición sugerente y con mayor dosis de verdad pero en el fondo también simplista es la que, advirtiendo el hecho

de que el capital monopolista opera en general con altas tasas de ganancia e influye sin duda en la inflación, propone regular o reducir esas ganancias a través de medidas fiscales, con lo que supuestamente desaparecería al menos la causa principal de la inflación. En el fondo estas dos últimas posiciones tienen en común que sitúan el proceso inflacionario no en la esfera de la producción sino de la realización, la circulación y la distribución del ingreso. Y por ello caen en la ilusión de que si se aumentan los salarios o se reducen las utilidades de las empresas, las cosas serían del todo diferentes.

El capital monopolista, en particular, sobre todo cuando, como acontece ya en un país como el nuestro opera como capital monopolista de Estado, contribuye sin duda a intensificar la inflación, y no porque caprichosamente y a su antojo fije los precios y se reserve las ganancias que más le convengan —lo que sin embargo no falta quien lo haga— sino porque al eslabonarse su acción con la del Estado de múltiples maneras, cambia todo el sistema de producción, de acumulación de capital, formación de precios, distribución del ingreso y por tanto de generación y reparto de la plusvalía. El CME, aunque con las limitaciones inevitables propias de este sistema, moviliza el potencial de recursos en beneficio del capital monopolista y de la reproducción de las relaciones capitalistas de producción; pero al hacerlo, si bien bajo ciertas condiciones impulsa el crecimiento de las fuerzas productivas y suaviza las altibajas cíclicas de la actividad económica, ello generalmente contribuye a la vez a agravar la inflación, la que incluso se vuelve un rasgo propio del CME en la presente etapa.

Precisamente por ello se antoja una ilusión pensar que la política del gobierno mexicano pueda eliminar en definitiva la inflación. Mientras haya capitalismo, y el que nosotros padecemos no es por cierto de los más eficientes, habrá inflación y crisis. De aquí debiéramos partir. Pero esto no significa desde luego que nada pueda o deba hacerse.

— *¿Qué pueden hacer los trabajadores frente a la inflación?*

Su primera batalla es ideológica; es muy importante y se ganará si empiezan a pensar por sí mismos y no desde los esquemas de la burguesía o las ilusiones pequeñoburguesas. Los trabajadores disponen de un arma defensiva que es la organización sindical. Menospreciarla sería un grave error. Pero para aprovecharla al máximo debieran también entenderse sus limitaciones insuperables. El sindicalismo suele moverse en planos y expresarse en demandas laborales de carácter reformista y economicista; suele repetir sin éxito viejas consignas y limitarse a plantear reivindicaciones concretas que directa o indirectamente beneficien económicamente a los trabajadores. Hasta hace dos años, el rápido crecimiento de la economía abrió a esa línea perspectivas. Pero desde que la crisis cíclica se inicia y la inversión, el ingreso y el empleo caen como nunca antes, los caminos del sindicalismo se angostan, y aún obtener una modesta mejora de los salarios que compense en parte el impacto de la inflación se vuelve cada vez más difícil, como lo saben los trabajadores. Y las cosas para las organizaciones independientes son todavía más desfavorables.

Parecería en tal virtud que el movimiento obrero y los sindicatos en general tienen que revisar y renovar sus métodos de lucha. Ahora ya no basta pedir mejores salarios y mayores prestaciones. La gravedad de la crisis obliga a abrir nuevos frentes y a utilizar armas más eficaces. Los trabajadores, a quienes los patronos acusan a menudo de ser los propiciadores de la inflación y del bajo nivel de eficiencia de la economía, deben dejar claro que ellos no sólo son quienes producen y crean la riqueza sino quienes en verdad encarnan hoy los mejores intereses de la nación y del pueblo. Sin menoscabo de exigir y luchar por mejores salarios y por condiciones de vida dignas, deben tomar la iniciativa y romper con la especie burguesa que los presenta como elementos

egoístas sólo interesados en sus propias demandas. El movimiento obrero debe forjar una estrategia y una táctica que, independientemente de defender el derecho de sus miembros a una vida mejor, se distingan a la vez por su compromiso con el resto del pueblo y con la nación en su conjunto; deben reclamar mayor participación en la dirección del proceso económico así como una política progresista diferente de la actual y que demuestre que los trabajadores no sólo son sujetos pasivos subordinados a las posiciones de la clase en el poder, sino quienes con mayor conciencia y fe en nuestra patria exigen que la crisis se combata, no burocráticamente sino a través de la acción y de la lucha.

Los trabajadores deben demostrar que son ellos, no los capitalistas quienes defienden en realidad la planta productiva, quienes se oponen al desempleo, quienes están realmente dispuestos a combatir la inflación y reconocen que la productividad debe elevarse, pero no en beneficio exclusivo del capital monopolista nacional y extranjero. El gobierno del general Cárdenas se enfrentó hace medio siglo a la depresión de los años treinta por caminos distintos a los que hoy toma la clase en el poder. Desde luego, aquellas condiciones no se repetirán mecánicamente. El desarrollo del capitalismo mexicano, de entonces a la fecha ha reforzado sin duda las posiciones de la oligarquía e incluso del imperialismo, sobre todo norteamericano. El enemigo de clase a combatir hoy no es débil ni fácil de vencer. Pero por fortuna los trabajadores tienen también una nueva dimensión y representan un potencial que nadie puede menospreciar. México no es ya el de los tiempos de Zapata y Villa. De un país de campesinos se ha convertido en uno de obreros, de trabajadores modestos urbanos y rurales, de empleados y pequeños productores a los que la actual crisis contribuye a proletarizar rápidamente.

La clase obrera puede y debe jugar en la lucha contra la inflación un papel fundamental. Para hacerlo sin embargo

debe replantearse ciertas cuestiones en verdad insoslayables. La lucha sindical, por ejemplo, con todo y su innegable importancia, no basta. Incluso un sindicalismo genuinamente popular y aun revolucionario no puede suplir a la organización y la acción política. Sobre todo bajo una crisis tan severa como la actual, los trabajadores deben organizarse políticamente y entender que son ellos, no el gobierno ni otras fuerzas las llamadas a jugar un papel decisivo en la lucha por hacer del nuestro un país verdaderamente independiente y en el que el pueblo viva cada vez mejor. Y sin perjuicio de levantar justas demandas, éstas deben ser apoyadas no sólo en la razón sino en la acción. Los trabajadores deben movilizarse en defensa de sus reivindicaciones, no cruzarse de brazos en espera de que se les haga justicia.

Tanto para facilitar la acción sindical como la propiamente política no debieran dar por supuestas las libertades democráticas. Bajo una crisis esas libertades siempre peligran. La huelga, la protesta, la manifestación, la asociación, son todos derechos indiscutibles y aún inviolables; pero en tiempos difíciles como los actuales no faltan quienes los ven como acciones inaceptables y aún como delitos. Lo que comprueba que su vigencia depende no tanto de lo que establecen las leyes sino de la acción y la capacidad de los trabajadores para defenderlos. La democracia burguesa es siempre insuficiente, parcial, inestable y engañosa. Pero no por ello debiera menospreciarse. Los trabajadores debieran ser inclusive los guardianes del orden constitucional y en particular de las garantías sociales y los derechos que la ley les otorga, incluida la soberanía del pueblo, principio fundamental en el que descansa su acción para organizar y poner en marcha todas las luchas que convengan a sus intereses.

Si la acción sindical suele ser difícil y aun riesgosa, la propiamente política lo es mucho más. Esta supone desde luego tratar de que el Estado y la burguesía modifiquen y aun

abandonen aquellas posiciones más lesivas al pueblo y a la nación; supone tratar de lograr reformas que sin afectar las bases mismas de funcionamiento del sistema permitan superar obstáculos, liberar recursos no utilizados, hacer crecer más de prisa y en condiciones menos inestables las fuerzas productivas, modificar las relaciones de producción, ganar ciertas batallas alterando con todo ello la correlación de fuerzas en favor del pueblo. Y sobre todo, la lucha política supone entender que en tanto la burguesía sea la clase dominante y la oligarquía su fracción hegemónica más poderosa, las cosas no podrán desenvolverse de una manera que responda a los intereses populares. Para combatir con éxito la inflación y la crisis que padecemos es indispensable avanzar en la lucha por el poder, hasta lograr que sea el pueblo, es decir los obreros, los campesinos, los empleados urbanos, los profesionistas y técnicos, los pequeños productores y no los ricos, los dueños de los medios de producción y quienes les sirven, los que desde los puestos de mando, económicos, políticos y militares decidan el rumbo que un país como el nuestro debiera tomar.

La lucha contra la inflación y contra la crisis debe pues concebirse fundamentalmente como una lucha política, como una lucha por el poder, y no sólo como una débil recomendación para que el gobierno en turno haga lo que usualmente no hará.

En un país como el nuestro subordinado al imperialismo y en el que el capitalismo recorre ya la fase del CME, esa lucha debiera ser fundamentalmente antimperialista y antioligárquica, es decir una lucha amplia, democrática, profundamente popular, ajena a todo sectarismo y a la vez combativa e intransigente en las cuestiones de principio.

Los trabajadores tienen que forjar en esa lucha un programa, una estrategia y una táctica propias; una política alternativa que les permita organizarse, definir con claridad al principal enemigo al que se enfrentan, conocer a fondo la

realidad en que actúan y tener mayor capacidad de respuesta a los problemas que la crisis y el desarrollo de la lucha misma plantean. La reforma agraria, la nacionalización de ciertas actividades económicas, el reclamo de una planificación que acabe con la anarquía y el desperdicio, la mejor distribución de la riqueza, cuestiones todas importantes y en las que el movimiento obrero mexicano insiste a menudo, son de aquellas por las que es preciso luchar. Pero los trabajadores más conscientes debieran hacer comprender al pueblo que ninguna se conseguirá bajo un capitalismo monopolista deforme, en tanto el propio pueblo no pueda promoverlas y llevarlas adelante desde un poder genuinamente democrático y revolucionario.

Para avanzar hacia el poder es asimismo necesario que los trabajadores se unifiquen y que definan con claridad no sólo a su principal enemigo sino a sus posibles aliados. La crisis está demostrando que la clase obrera, llamada históricamente a jugar un papel decisivo en la liberación y en la transformación revolucionaria de nuestro país, debe entender que no es el Estado burgués la fuerza principal en que puede apoyarse, su aliado natural y el elemento del que ha de depender el éxito en sus luchas. Sin perjuicio de no caer en la posición absolutista inversa y creer que todo lo que hay en el Estado es negativo y contrario a los intereses del pueblo; sin menospreciar a los elementos susceptibles de neutralizarse y aun de ser ganados a la causa revolucionaria, los obreros deben entender que sus mejores aliados son los campesinos y trabajadores del campo, los empleados modestos, los intelectuales y estudiantes progresistas y los pequeños productores empobrecidos a los que la crisis va dejando con su fuerza de trabajo como la principal mercancía que pueden vender.

Ninguna acción es desdeñable en la lucha contra la inflación. Las amas de casa, por ejemplo, a las que habitualmente dejamos de lado, debieran jugar un papel muy

importante porque como nadie sufren los embates de los precios en constante alza, de la especulación y los abusos. Ellas podrían influir grandemente para que se denuncien irregularidades, para rechazar aumentos arbitrarios, para demandar precios razonables de los artículos de primera necesidad, para combatir el consumismo enajenante y absurdo al que nos han ganado las transnacionales y en general el capital monopolista, para organizar huelgas y paros de compradores y para reclamar servicios indispensables que, en días tan difíciles como éstos, beneficien al menos a las capas más golpeadas del pueblo.

Los estudiantes y sobre todo aquellos que mantienen posiciones progresistas y se sienten comprometidos con los intereses populares, pueden también ayudar a crear conciencia en torno a la inflación y la necesidad de combatirla. Pueden hacer denuncias, protestar, llevar registros del alza injustificada de los precios de artículos de los que requiere la mayoría de la población y constituirse en defensores de la economía del pueblo.

Los maestros, que sin duda comprenden mejor que muchos otros ciudadanos los problemas sociales, debieran ayudar a que no sólo sus alumnos sino los padres de familia con quienes suelen estar en estrecho contacto, y desde luego los propios trabajadores comprendan qué es la inflación, por qué es una manifestación de hechos más graves y de mayor alcance como la crisis actual del capitalismo y por qué, sin perjuicio de tratar de que el gobierno adopte una política diferente, cada mexicano debiera sentirse con el derecho y el deber de actuar, de defender sus legítimos intereses y de conjugar esfuerzos para detener de algún modo esta incontenible alza de precios que en realidad es una nueva arma de los ricos para empobrecer más a los trabajadores.

Los profesionistas y los intelectuales, en particular quienes con posiciones avanzadas trabajan en campos en los que es más fácil seguir el proceso económico, la crisis misma

y el curso de la inflación, debieran entender que poner su preparación al servicio del pueblo es la mejor manera de cumplir con el compromiso que, al salir de la Universidad, empeñan solamnementemente de servir a la nación y no de lucrar ni de convertir el título profesional en una patente para explotar a los demás.

La lucha contra la inflación y contra la crisis debe ser por otra parte, hemos dicho ya, antimperialista y antioligárquica. El imperialismo es, en un sentido histórico, no sólo el principal enemigo de nuestro pueblo sino el principal causante de la inflación. Lo es porque se asienta en un capitalismo monopolista de Estado que, incapaz de emplear racionalmente los recursos a su disposición, los malutiliza, los destina a gastos improductivos, promueve el consumismo, el parasitismo y la especulación, encarece lo que vende y se niega a pagar equitativamente a otros pueblos lo que estos producen, concentra en su poder los recursos financieros, eleva arbitrariamente las tasas de interés y pone en jaque el sistema monetario y financiero internacional, y sobre todo porque lanza al mundo al militarismo, las dictaduras y una carrera armamentista suicida que distorsiona gravemente la economía internacional y pone en peligro la supervivencia de la humanidad entera.

Por eso la lucha del pueblo contra la inflación debe ser a la vez profundamente antimperialista y proyectarse como una lucha por la plena independencia nacional y por un nuevo orden económico internacional. Si bien es cierto que los esfuerzos desplegados por los países del llamado "Tercer Mundo" en la última década no han dado hasta ahora los frutos que de ellos se esperaban, la demanda de un nuevo orden económico internacional es legítima, responde en parte a los intereses de las burguesías en el poder, pero también a los intereses nacionales de nuestros pueblos. De ahí que los trabajadores y las fuerzas progresistas, lejos de ver tales reivindicaciones como deleznable y ajenas, debieran

hacerlas suyas y aun darles un nuevo y más rico contenido antimperialista.

Con frecuencia tiende a pensarse que la lucha contra el imperialismo consiste fundamentalmente en la solidaridad con otros pueblos. Y si bien éste es un aspecto fundamental que desde luego no debiera menospreciarse, y menos hoy cuando países hermanos como Cuba, Nicaragua y El Salvador son víctimas de la acción de un enemigo que a toda costa intenta hacer prevalecer sus intereses, el escenario central del antimperialismo debe ser nuestro propio territorio y su misión principal la defensa de los mejores intereses de nuestro pueblo.

Por otra parte, acaso no se comprenda bien por qué la lucha contra la inflación debiera ser a la vez contra el imperialismo. A riesgo de no añadir mucho a lo ya dicho y a lo que el lector probablemente sabe, quisiera al menos subrayar que el imperialismo significa entre otras cosas:

— Desarrollo e intercambio desiguales para países como el nuestro; deformaciones estructurales profundas y por tanto incapacidad para lograr un desenvolvimiento medianamente racional;

— Drenaje y aun fugas incontenibles de recursos financieros que contribuyen decisivamente a dilapidar o no aprovechar el potencial de ahorro, y que confirman que lo que fundamentalmente interesa al capital monopolista extranjero no es financiar nuestro desarrollo sino obtener altas ganancias y enviarlas a sus países de origen;

— Significa a menudo además explotación desmedida de recursos naturales no renovables, y en resumen estrategias de desarrollo que acentúan la desigualdad y la dependencia, impiden una integración nacional coherente, debilitan la estructura productiva y determinan la utilización inadecuada del potencial de crecimiento, obligando a menudo a echar mano de medios de financiamiento que contribuyen a intensificar la inflación.

La lucha contra la inflación debe tener además una clara proyección antioligárquica, o sea enderezarse no sólo contra el capital monopolista extranjero y contra un imperialismo concebido no como algo externo, sino contra la fracción hegemónica de la burguesía mexicana, contra el puñado de familias multimillonarias, acaso no más de 500 en un país de 75 millones de habitantes, que vinculadas estrechamente al capital extranjero y al Estado, desde poderosos consorcios monopolistas integrados hoy en complejos grupos industrial-financieros influyen decisivamente en el rumbo, el carácter, las modalidades y las deformaciones de la economía nacional. La pretensión de esa minoría privilegiada de creer que ella es la que sabe lo que conviene a nuestro país, la única capaz de dirigirlo y la que cuenta con la preparación y los recursos para hacer frente a los problemas del desarrollo, es no sólo desmedida sino del todo inaceptable. Y que ello es así lo demuestran no tales o cuales opiniones sino los hechos, los problemas no resueltos, la crisis misma y la necesidad de hacerle frente con medidas que, siendo indispensables, resultan a la vez imposibles porque lesionan los intereses precisamente de esa minoría.

El poder de la oligarquía descansa en el capital monopolista. Por eso una acción antioligárquica es a la vez antimonopolista. La inflación procede en gran medida del intento de crear, bajo una crisis tan severa como la actual, condiciones que favorezcan al capital monopolista. El Estado, concretamente, aunque a menudo postule lo contrario y aun trate de dar la impresión de que sólo le preocupa el bien general, a través de los más diversos medios translada una parte de la plusvalía hacia el capital monopolista. Pero ni elevando la tasa de ganancia a niveles que en otros tiempos habrían sido suficientes para reanimar la economía, logra ahora ponerla en marcha vigorosamente.

El capital monopolista, sobre todo bajo una crisis tan grave como la actual, intenta por todos los medios a su alcance

contrarrestar la tendencia a la caída de la tasa de ganancia. Adopta con tal fin múltiples medidas "racionalizadoras" que, no obstante sus variadas formas y la diversidad de mecanismos a través de los cuales se ponen en práctica, lo que persiguen como objetivo fundamental es elevar la productividad y sobre todo el grado de explotación de los trabajadores. Por esto, precisamente la acción antimonopolista debiera desdoblarse en dos direcciones: de un lado tratar de mejorar o al menos de que no empeoren las condiciones de vida de los trabajadores, y del otro combatir las medidas que el capital monopolista toma para fortalecer sus posiciones, sin importarle el impacto desfavorable de tales medidas sobre los precios.

En la primera línea de acción hay sin duda mucho por hacer: los trabajadores debieran cerrar el paso a una creciente explotación, defender firmemente el régimen de libertades democráticas en vigor, por débil que sea; oponerse a una política salarial que degrade cada vez más las condiciones de quienes trabajan; resistir a los intentos de los grupos más poderosos de invalidar y echar por tierra prestaciones laborales conquistadas desde hace años, a base de grandes esfuerzos; luchar por una genuina independencia sindical y porque los trabajadores, como ciudadanos concientes, ejerzan a la vez sin cortapisas sus inviolables derechos políticos y se organicen libremente como mejor convenga a sus intereses.

La crisis ha mostrado en forma especialmente dramática, que el capital monopolista nacional y extranjero no sólo no está dispuesto a contribuir a que nuestra economía se fortalezca sino que, por encima incluso de un reclamo propiamente patriótico, prefiere sacar del país todo lo que pueda ser conveniente a sus intereses y en un momento dado, aun saquearlo, sin importarle las consecuencias desastrosas que tal forma de actuar pueda tener. Si bien los capitalistas extranjeros y la oligarquía mexicana no son los

únicos que en los últimos años provocaron la fuga incontenible de dinero hacia el exterior, es indudable que fueron quienes lo hicieron en mayor medida. El capital extranjero contribuye decisivamente, como es sabido, a empobrecer a países como el nuestro y a agudizar sus más graves desajustes. La cada vez más desfavorable relación de intercambio, las condiciones onerosas de sus créditos bancarios, la imposición de tecnologías costosas y a menudo inadecuadas, el proteccionismo que impide que nuestras manufacturas tengan acceso a los mercados de los países industriales, las presiones diplomáticas que suelen ejercerse para que se acepten condiciones que incluso son a menudo del todo desfavorables, el drenaje de fondos que entrañan el envío de dividendos y la manipulación intrafirma de los precios a que operan las transnacionales, todo ello nos impone pesadas cargas y contribuye a alentar la inflación.

Y el peso de la oligarquía doméstica es aún mayor. En efecto ésta influye decisivamente en la estructura productiva, debilitándola y generando deformaciones de difícil y aun imposible corrección; influye además en el volumen y la composición del consumo, el que proyectándose en buena medida hacia bienes y servicios más o menos superfluos, hacia artículos importados y caros y hacia mercancías que proceden de actividades improductivas o que en rigor son innecesarias, alientan un consumismo excesivo y perjudicial que reduce el excedente, dilapida recursos que debieran emplearse productivamente y restringe y desvía el proceso de acumulación de capital. Y a todo esto habría que añadir que la burguesía y en particular la oligarquía se distinguen por su capacidad para enviar fondos al exterior, es decir para drenar el potencial de ahorro en perjuicio del país, y por tanto para crear situaciones como la presente, en que la escasez de recursos financieros obliga o al menos invita a financiar el gasto de manera inflacionaria. Los ricos constituyen como se sabe una pequeñísima parte de la población,

si se quiere una minoría insignificante pero que saca constantemente dinero sobre todo a los Estados Unidos; lo hace de múltiples maneras: a través de compras casi siempre de contrabando de artículos de consumo, a través de viajes de negocios y de recreo, de compras de bienes raíces o el arrendamiento de departamentos de lujo, del envío de los hijos para que se eduquen en el extranjero, y en años recientes, sobre todo a través de la apertura de cuentas, la constitución de depósitos y la compra de valores en bancos del exterior. Desde luego que esta empobrecedora exacción de recursos debiera limitarse al máximo. Y por ella debiera también luchar el pueblo porque es sin duda una de las causas de la inflación. Pero una acción verdaderamente eficaz en tal sentido requeriría un gobierno popular que no tenemos, y que no caerá del cielo. La experiencia vivida en los días de la reciente nacionalización de la banca privada fue muy reveladora. Tras la enérgica denuncia de los "sacadólares" del entonces presidente López Portillo parecía que se procedería contra ellos sin vacilaciones y sin demora. Pero tras la alharaca en torno a las listas de los principales responsables del "saqueo", que una comisión investigadora del Senado daría supuestamente a conocer al público, de hecho todo quedó como siempre: en medio del silencio, la confusión, la demagogia y aun el abandono. Lo que permitió a los "sacadólares" seguir enriqueciéndose sin que nadie los molestara.

La acción contra la oligarquía y contra el capital monopolista en que se sustenta debiera pues tomar los más diversos caminos: tratar de impedir que los monopolios manejen a su antojo los precios de lo que producen y venden y exigir que el Estado controle o al menos regule los precios de artículos básicos; reorientar la política económica en busca de mayor eficiencia y de que los grandes capitalistas no sean, como hasta ahora, los principales beneficiarios de lo que hace y deja de hacer el gobierno; combatir realmente la

corrupción donde ésta se encuentre, y sin que se burlen de las medidas correctivas un jefe de la policía y tantos otros funcionarios que no podrían justificar el monto de sus fortunas, y bajo una crisis como la actual, optar por una genuina política de austeridad, pero no a la manera en que la entienden algunos — como una que deprima los salarios reales de los trabajadores y ciertos gastos de aquellos que benefician al grueso de la población —, sino como una política que empiece por reducir los sueldos y prestaciones de los más altos funcionarios del Estado y que combata realmente la burocracia, la ineficiencia, el gasto improductivo, la corrupción, los privilegios y los altos ingresos no de quienes sólo tienen para malcomer sino de los mexicanos que reciben sumas de dinero de tal magnitud que, con inflación y todo viven en condiciones que en verdad constituyen el principal obstáculo a vencer en una lucha seria contra la inflación y contra el subdesarrollo y la pobreza.

La lucha antimonopolista sin embargo no es fácil. Supone enfrentarse a un enemigo poderoso al que es preciso situar correctamente. Obliga a sumar fuerzas de todos aquellos contingentes que, de diferentes maneras son afectados por el capital monopolista, y exige entender la dimensión histórica y política del enfrentamiento con los monopolios, sin la ilusión pequeñoburguesa de que en las presentes condiciones del capitalismo se puede volver atrás, a los viejos tiempos de la libre competencia y de que el nuevo eje de la economía puedan ser centenares de miles de prósperas empresas pequeñas y medianas. El capitalismo vivirá la última etapa de su desarrollo, con monopolios. La idea de un capitalismo que pueda a estas alturas librarse de ellos es enteramente utópica. Lo único a que puede aspirarse es a que esos monopolios cambien. Algunos de los hoy extranjeros pueden volverse nacionales. Algunos hoy privados pueden quedar bajo el control del Estado, y otros pueden fusionarse y aún desaparecer pero para que otros sigan siendo monopolios capi-

talistas. Sólo cuando el pueblo tome el poder, aun prevaleciendo todavía relaciones capitalistas de producción los monopolios podrán ser destruidos bajo la acción de un nuevo Estado revolucionario. Pero esa posibilidad aún no está al alcance de nuestro pueblo. Para convertirla en realidad tendremos antes que librar con éxito una dura lucha contra el imperialismo y la oligarquía.

La idea de la oligarquía de que es ella la que encarna y la que mejor se identifica con el interés nacional es demagógica y falsa. En el México de hoy ese interés lo representan los trabajadores. Y esta es una más de las razones por las cuales son los trabajadores de la ciudad y del campo, manuales e intelectuales, quienes se ganan la vida sin explotar a otros, el eje en torno al cual es posible movilizar hoy al pueblo todo de nuestro país no sólo contra la inflación y la crisis sino en busca de una transformación profunda, realmente revolucionaria y que a partir de un gobierno popular sienta las bases de un desarrollo nacional estable e independiente.

El pueblo, pues, tiene la palabra.